



*Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

26 de noviembre de 2009

Señor Diputado
Roberto Alejos Cámbara
Presidente de la Junta Directiva
Congreso de la República
Su Despacho

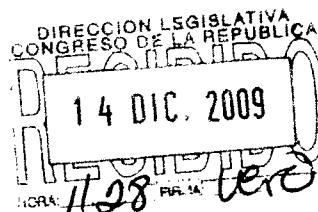
Honorable Señor Presidente:

Con atento saludo me dirijo a usted, con el objeto de remitir el **Dictamen Favorable número 07-2009**, que la Comisión de Economía y Comercio Exterior emitió a la iniciativa identificada con número de registro 4090 la que aprueba la “**Ley de Protección de Datos Personales**”, con el propósito de que se conozca y siga el trámite correspondiente para su discusión y aprobación por el Honorable Pleno del Congreso de la República.

Agradeciendo su atención, me suscribo con las muestras de consideración y alta estima.


Mariano Rayo Muñoz
Presidente

MRM/mjg
c.c. archivo





00000035

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

DICTAMEN NUMERO 07 - 2009

De la Comisión de Economía y Comercio Exterior
a la Iniciativa de Ley 4090
Ley de Protección de Datos Personales

HONORABLE PLENO

Con fecha 20 de agosto del año 2009 el Honorable Pleno conoció la Iniciativa de Ley 4090 propuesta por los Diputados Gustavo Blanco, Pablo Duarte, Marco Solares, Leonel Barragán, José Alejandro Arévalo y Mariano Rayo, en la cual se propone aprobar la Iniciativa de "Ley de Protección de Datos Personales", remitiéndola a la Comisión de Economía y Comercio Exterior para su estudio y dictamen correspondiente.

ANTECEDENTES

En el contexto internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 12, preceptúa: *"Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques."*

Asimismo, La Organización de Naciones Unidas, en su resolución 45-95 de la Asamblea General, estableció una lista de principios relativos a las garantías mínimas que deben prever las legislaciones nacionales, incluyendo títulos como "Principios de especificación de Finalidad, Principio de Seguridad, Supervisión de Sanciones y Flujo Transfronterizo de Datos, entre otros".

1. Análisis de legislación comparada

De acuerdo al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública de México, en América Latina, solamente Argentina y Chile cuentan con la legislación específica a la protección de datos personales en forma integral. En el caso de México, se cuenta con una regulación parcial aplicado solamente para archivos públicos. Paraguay lo regula a través de la Constitución.

Canadá lo regula con leyes de protección de datos personales a nivel federal y provincial; Estados Unidos lo hace por medio de un PRIVACY ACT de 1974, en el que establece un código de información justa que regula la colección, mantenimiento, uso y diseminación de información personal almacenada en los archivos de las instituciones gubernamentales.

En la Unión Europea la mayoría de los estados miembros contaban con normativas estatales de protección de datos personales, sin embargo, con el objetivo de homogenizar los procesos, se crea la Directiva 95/46/CE, para



00000036

Congreso de la República Guatemala, C.A.

contar con un sistema más efectivo de implementación.

Dentro de la Carta de Derechos Fundamentales de Unión Europea se reconoce el derecho a la protección de datos, como derecho fundamental y autónomo, distinto al derecho de la intimidad y la privacidad de las personas.

2. Contexto Nacional

La Constitución de la República de Guatemala, tutela como derecho fundamental en el artículo 24 lo siguiente: *"...la correspondencia de toda persona, sus documentos y libros son inviolables (...) Se garantiza el secreto de la correspondencia y las comunicaciones telefónicas, radiofónicas, cablegráficas y otros productos de tecnología moderna"*.

En el Código Penal de la República de Guatemala, se hace referencia a este tema. En el artículo 274 D), Registros Prohibidos, *"se impondrá prisión de seis meses a cuatro años y una multa de doscientos a mil quetzales, al que creare un banco de datos o registro informático con datos que puedan afectar la intimidad de las personas"*. Asimismo en el artículo 274 F), Uso de Información, *"se impondrá prisión de seis meses a dos años y una multa de doscientos a mil quetzales a quien sin autorización, utilizare los registros informáticos de otro o ingresare, por cualquier medio a su banco de datos o archivos electrónicos."*

3. Análisis coyuntural

La información en Guatemala como en el resto del mundo es un recurso muy valioso, ya que tiene la capacidad de plasmar una imagen completa de un individuo en particular, desde su record crediticio hasta sus antecedentes penales y referencias personales. Por lo mismo, es de suma importancia que estos datos se mantengan dentro de una estricta confidencialidad y que su uso sea limitado para evitar ciertas irregularidades, estafas, ambigüedades en los sistemas de créditos y mal manejo de información no actualizada.

A pesar de que en Guatemala, existen sanciones específicas al tema, contemplados en el Código Penal, estas no se respetan y ni se llevan a cabo. Ya que muchos de nuestros ciudadanos se han visto perjudicados por la falta de cumplimiento de dicha legislación.

Existen empresas mercantiles en Guatemala que se dedican a elaborar reportes de personas individuales o empresas. Estos informes que contienen desde información general, datos sobre el comportamiento de pago hasta referencias comerciales, legales y laborales. En la actualidad parece un servicio importante, pero el problema radica que estas empresas no cambian, ni actualizan la información y trafican datos personales sin el consentimiento de las personas afectadas. Son constantemente acusados de no esclarecer ni actualizar su base de datos o de información. Es decir, el estatus de los afectados nunca es modificado y perjudica en cuestiones de demandas, créditos y el nombre y reputación de la persona.

El imparable avance de las tecnologías informáticas en la actualidad, facilita el tratamiento e intercambio de

Protección de Datos Personales



00000037

Congreso de la República Guatemala, C.A.

datos en los diferentes sectores de la actividad económica y social, aumentando los riesgos de violación de la intimidad. Hoy en día las informaciones adquieren valor económico, representan transacciones bancarias y financieras, donde es posible construir una imagen de los ciudadanos. Por lo que es de suma importancia una regulación en Guatemala que vele por la Protección de Datos Personales, contra informaciones imprecisas, inexactas o desproporcionadas; permitiendo al ciudadano la posibilidad de controlar quien tiene acceso a sus datos.

En la actualidad, es de cita común el mencionar la importancia de la Internet para las relaciones comerciales del mundo, y es que en realidad la red de redes se ha convertido en una verdadera autopista que refleja todas las maravillas y las perversiones de la sociedad que la ha concebido. El acceso inmediato a datos e informaciones de la más variada índole, así como a mecanismos para enviar mensajes, imágenes y sonidos a cualquier rincón del mundo, sin las ataduras de distancia y tiempo, han hecho de Internet la esencia básica de esa sociedad de la información.

A pesar de que todos estos avances garantizan mejores condiciones de vida para los seres humanos, así como medios para incentivar el intercambio y producción de conocimiento, es un hecho que el tráfico con informaciones personales, de datos sensibles de las personas, se ha convertido en un verdadero riesgo vital en una sociedad profundamente marcada por la necesidad de intercambiar datos e informaciones.

Tanto los viajeros de Internet, como los ciudadanos que realizan transacciones de la más variada índole, van dejando una huella indeleble que puede ser utilizada para los más diversos objetivos, algunos de ellos lícitos, pero muchos de ellos ilícitos, causando gravísimos perjuicios económicos y sociales a los afectados. Algunos autores han indicado, correctamente, que nos encontramos viviendo una época donde los ciudadanos tienen una presencia virtual, donde todas sus aspiraciones, gustos, apetencias, y más ocultas inclinaciones están disponibles para aquel que desee rastrearlas, perfilarlas, catalogarlas y utilizarlas con los más diversos fines y objetivos de control.

Este peligro de control sin límites, y sin conocimiento del afectado, merece ser tomado en cuenta en la coyuntura que vive actualmente el país, en particular su contexto violento, de criminalidad.

Guatemala, al igual que otros países del mundo, debe dotar a sus ciudadanos de un estatus jurídico con el fin de que puedan realizar, en la práctica de la sociedad de la información, su derecho al libre desarrollo de su personalidad y su autodeterminación, sin temor a que el ejercicio de estas y otras libertades esté ensombrecida por el temor a ser observado y detalladamente controlado cuando busca ejercer sus derechos.

El moderno tratamiento de las informaciones tiene, por supuesto, un sinnúmero de ventajas para los ciudadanos que viven en sociedad, sin embargo, sus peligros son mucho más serios porque su carácter es incruento, sutil, carente de violencia. La observación de los datos personales que circulan por las redes de información se hace, normalmente, sin que los afectados tomen conocimiento de tal circunstancia, amparados, en general, en su convencimiento de que si no tienen algo que ocultar, por qué tendrían que preocuparse por velar por su intimidad y por el ejercicio de su libertad.



00000038

Congreso de la República Guatemala, C.A.

Esta no es, por supuesto, la situación en otras latitudes, donde existe una profunda sensibilidad por los riesgos representados por el uso indiscriminado de datos personales, sobre todo en manos de particulares.

Hoy en día, el gran riesgo no lo representa, directamente, el procesamiento centralizado de datos, ni el tratamiento de información que realiza el Estado por medio de sus dependencias, como lo es el RENAP, la emisión de Pasaportes o la emisión de Licencias de Conducir. Quizá el riesgo mayor está representado por el creciente desarrollo de la informatización de los particulares, los cuales utilizan cada vez los más rápidos, poderosos y pequeños equipos que ofrece la tecnología de la información. Este apertrechamiento tecnológico ubica al procesamiento de datos en manos de los particulares en un papel trascendental en la sociedad de mercado, pero también en la mira de la reflexión sobre los peligros que este tratamiento indiscriminado de datos implica para los ciudadanos, así como para las oportunidades de garantizar la libertad en una sociedad cada vez con menos posibilidades para la soledad y la reserva.

Ha quedado demostrado que los ciudadanos se encuentran indefensos ante cada vez más graves y profundas invasiones en sus ámbitos de intimidad, sin tener tales invasiones el correlato de una efectiva tutela contra abusos, contra informaciones imprecisas, inexactas o exageradas o desproporcionadas frente a los intereses y objetivos lícitos que estas empresas o personas persiguen.

Esta laguna normativa no solo genera un grave peligro para la vigencia real de los derechos constitucionales a la dignidad, la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad, sino también representa una grave desigualdad frente a la tutela que se ofrece en otros países de la región latinoamericana que ya han ido comprendiendo la importancia de alcanzar estándares en este campo. Alcanzar estos estándares significa además, una importante condición para participar en las negociaciones comerciales con importantes mercados como los de la Unión Europea, cuyas directivas y normativas exigen que los países con los cuales se tengan relaciones de este tipo demuestren que tienen estándares similares de protección a los ofrecidos en los países miembros.

Las tecnologías de la información y la comunicación han hecho posible que se construyan los instrumentos para que el advenimiento de una sociedad absolutamente incolora se encuentre a la vuelta de la esquina. Ya no es posible mantener en el ámbito privado ciertos aspectos de la personalidad, como los deseos, las apetencias, las inclinaciones comerciales, religiosas, políticas o hasta intelectuales. Basta con dar seguimiento a las pautas de consumo o de visita de un ciudadano, lo que es hoy muy sencillo gracias a los servicios de compra electrónicos, para conocer cuál es el perfil individual de un ciudadano o incluso los perfiles de un grupo de ciudadanos, lo que lo reduce en su dignidad y lo convierte en un verdadero objeto de los procesos de información.

Esta condición de la sociedad en que vivimos puede conducir, como lo advierten estudiosos de la materia, como el profesor de la Universidad de Frankfurt del Meno, Dr. Spiros Simitis y el vicepresidente del Tribunal Constitucional Alemán, Prof. Dr. Winfried Hassemer, a que los derechos individuales se conviertan en letra muerta, al conducir al ciudadano a un verdadero estado de pánico y a una resistencia a ejercer sus derechos individuales ante el riesgo de ser observado y catalogado durante el proceso de su ejercicio como ciudadano. Sería como derogar su "status civitatis" o estado de ciudadanía, por la vía de garantizar solo formalmente su



00000039

Congreso de la República Guatemala, C.A.

condición de ciudadanía, un riesgo que no puede correr una sociedad que se considere democrática.

Si un ciudadano no tiene una capacidad de interactuar en esta sociedad tecnológica con aquellos que pretenden controlarle y perfilarle, se le estaría quitando la última posibilidad para ratificar su estatus de individualidad. Si el ciudadano no tiene posibilidad de controlar quién tiene acceso a sus datos, con qué objetivos y bajo qué presupuestos, pronto tendrá que desistir del ejercicio de sus derechos fundamentales, ya que muchas libertades públicas (como la libertad de asociación y de reunión, así como las libertades de expresión y de autodeterminación) se convertirían en meras formas sin contenido, ya que aumentarían al mismo tiempo las posibilidades para la manipulación a fin de impedir o al menos amedrentar a quienes deseen ejercer tales libertades, no con prohibiciones directas, sino con la aplicación de consecuencias indirectas al mero ejercicio de un derecho. Si el ciudadano tiene acceso a sus datos, podría controlar y dirigir el sentido social de los mismos, a fin de evitar consecuencias nefastas no a su esfera íntima de manera directa, sino a su posibilidad de participación social.

El derecho a la protección de la persona frente al procesamiento de sus datos personales surge así como una necesidad en el Estado de Derecho, como una necesidad de reflexión sobre los derechos y las libertades públicas en juego, como también de las posibilidades de la persona humana en una sociedad tecnológica.

El respeto a la dignidad humana es un derecho constitucional que tiene dos importantes elementos, por una parte la consideración de que es indispensable acordar a la persona un derecho a su autodeterminación, y, por otra parte, un derecho a interactuar en la sociedad como un eje de imputaciones jurídicas. La posibilidad de respetar la dignidad humana en la sociedad tecnológica, implica que la persona pueda realizar su plan de vida, libremente escogido, sin temor a ser perseguido por la expresión de sus decisiones o su escogencia de caminos para alcanzar sus metas personales, siempre que ello no implique la lesión de esos mismos derechos en otras personas.

La tutela tradicional del ciudadano desde la perspectiva de la intimidad ha demostrado ser insuficiente en la actual sociedad de la información. Esto último es especialmente cierto si se toman en cuenta las nuevas condiciones en que los seres humanos se comunican e interactúan. Cuando la mayor parte de las comunicaciones de los ciudadanos se producen mediante el empleo de tecnología, dicha tecnología define las nuevas condiciones de regulación, las cuales se alejan, cada vez más, de las usuales consideraciones normativas. Como se ha dicho, la nueva protección de la esfera de la vida privada está definida por la posibilidad de alcanzar una tutela posible de la información.

La justificación para otorgar el "status positivus"¹ del ciudadano se vincula directamente con la tutela de la dignidad de la persona humana, con la necesidad de proteger el libre desarrollo de la personalidad, y con el

¹ La teoría iuspublicista de los "status" iniciada por Jellinek se busca completar hoy día con la propuesta de introducir un "status positivus socialis", que abarcaría los intereses económicos, culturales y sociales. El Prof. Erhardt Denninger de Frankfurt del Meno postula asimismo la existencia de un "status activus processualis", el cual tiene como fundamento la facultad de la persona de participar activamente en los procesos que le afectan, así como en las organizaciones encargadas de la tutela de sus derechos. Cfr. a este respecto, Pérez Luño, Antonio, La tutela de la Libertad Informática, en: Agencia de Protección de Datos, Jornadas sobre el Derecho Español de la Protección de Datos Personales, Madrid, 1996, pp. 94-95.



00000040

Congreso de la República Guatemala, C.A.

afianzamiento de la libertad en la sociedad democrática, ya que el control de las informaciones "...aparece como una condición para una convivencia política democrática"².

Como puede desprenderse claramente de las aseveraciones anteriores, no se pretende limitar el tratamiento electrónico de los datos que es, en sí mismo, una condición para el desarrollo económico de los países. De lo que se trata es de fomentar el control en contra de los abusos con los datos y las informaciones, afianzando los derechos y las garantías del ciudadano, y promocionando la participación social de todos en la construcción de mejores condiciones para la comunicación y la producción de conocimiento.

El derecho a la tutela frente a los abusos en el tratamiento de las informaciones es solo un correlato del derecho a la información, que es una de las bases trascendentales para fundar un moderno Estado democrático. Si la sociedad moderna depende de que las informaciones circulen, entonces también debe construirse una verdadera ética informativa, que no solo acarree una nueva forma de entender el manejo y tratamiento de las informaciones, sino también la sistemática tendencia hacia la transparencia, evitando, de esta manera, que los datos se sistematicen, se procesen y se utilicen de espaldas a los afectados, lesionándolos en sus intereses económicos, pero sobre todo en sus posibilidades de interacción social. Lograr esto y alcanzar al mismo tiempo las condiciones para la sociedad de mercado es un importante reto para el legislador y una complicadísima situación de ponderación de intereses, donde entran en juego no solo las necesidades de información de la sociedad, y la nueva configuración de las relaciones económicas entre los países, sino que habrá de considerarse igualmente el interés del ser humano no solo a gozar de mayor información en todos los ámbitos del conocimiento y de la cultura (freedom of information), como también la necesidad de tutelar a la persona frente al uso desmedido de sus datos personales.

La correlación práctica y posible de los intereses en juego ya planteados, consistentes en la necesidad de la tutela individual del ciudadano y de las condiciones de desarrollo de una verdadera economía electrónica, basada en la circulación de informaciones de la más variada índole, ha llevado a los Estados a explorar la concordancia práctica de las variables económicas con un derecho denominado "derecho a la autodeterminación informativa". Se trata de un redimensionamiento del derecho a la intimidad, que cobra una nueva jerarquía normativa por su concordancia práctica con otros derechos constitucionales tales como el derecho a la protección de la dignidad humana, a la libertad individual, a la autodeterminación y el principio democrático, que antes de ser utilizados como puntos de sustentación vacíos y sin contenido, adquieren una nueva perspectiva en el Estado de Derecho.

Es de cita frecuente que las leyes de protección frente al tratamiento de datos personales son innecesarias si existe una adecuada protección constitucional mediante amparos especiales, denominados en nuestro margen cultural "recursos de hábeas data".

En realidad, los recursos de hábeas data no son más que instrumentos o mecanismos de garantía procesal que se acuerdan a favor de las personas que han sufrido una lesión en su ámbito de intimidad producto de usos

² Así, Pérez Luño, Antonio, Los Derechos Humanos en la Sociedad Tecnológica, en: Losano/Pérez Luño/Guerrero Mateus, Libertad Informática y Leyes de Protección de Datos Personales, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1989, p. 330.



0000004

Congreso de la República Guatemala, C.A.

abusivos de sus datos o informaciones. Se trata, en general, entonces, de un derecho procesal reactivo frente a una lesión ya ocasionada. No tienen una vocación preventiva de las lesiones y sus efectos son casi siempre acordados a favor del afectado y no tienen efectos extensivos hacia quienes sufren las mismas lesiones.

Es curioso, que en el ámbito latinoamericano la gran evolución hacia leyes de tutela se haya convertido en una mera reglamentación del hábeas data, el cual, en teoría, depende más bien del desarrollo de la jurisprudencia de tutela que vayan sentando los tribunales constitucionales. No obstante, al igual que en otros países, aún es necesario acordar tutelas preventivas, que reaccionen antes de que se ocasionen riesgos de incalculables proporciones para una gran cantidad de ciudadanos.

En el estado actual de la discusión se debate entre impulsar reformas legislativas que garanticen facultades de control sobre las informaciones personales de los ciudadanos y la necesidad de incorporar prescripciones constitucionales que amplíen la tutela que recibe la intimidad.

Este tipo de leyes demuestran ser esenciales como complemento de las garantías generales del Estado de Derecho, no solo como limitativas de esas ansias exorbitadas de información del Estado, sino también como un método práctico y razonable para que el ciudadano pudiera acceder a sus propios datos, almacenados en diversas bases o bancos de datos, y ejercer un control sobre ellos.

DE LA INICIATIVA DE LEY

La estructura de la Iniciativa de Ley de Protección de datos Personales, comprende un Título único, el cual se subdivide en cinco capítulos, desarrollando el cuerpo de la Ley en cuarenta y siete artículos, en los cuales se determinan las normas y regulaciones que garanticen el respeto y el derecho de autodeterminación informativa de cualquier persona física o jurídica, en relación a su vida o actividad privada. Como también, la defensa de su libertad e igualdad con respecto al tratamiento automatizado o manual de los datos correspondientes a las personas o bienes, dentro del estado de Guatemala.

Se crea una "Dirección para la Protección de Datos Personales, encargado de las inscripciones y autorizaciones de las bases de datos, protocolos de actuación, atención a denuncias e inspecciones oficiosas. Órgano adscrito a la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Los objetivos que persigue alcanzar la Ley de Protección de Datos Personales son:

1. La protección de los derechos fundamentales de la persona.
2. La protección de la persona ante la difusión de datos personales y sensibles sin autorización.
3. Llenar un agujero en la legislación guatemalteca, ante el desarrollo de las tecnologías informáticas.
4. Posicionar a Guatemala frente al mundo globalizado herramientas para proteger a sus ciudadanos de tráfico de datos, venta de datos de personas sin autorización de las mismas. Evitando que empresas informen erróneamente o informen sin actualización de sus datos, perjudiquen a personas individuales o jurídicas dentro del territorio Guatemalteco.



00000042

Congreso de la República Guatemala, C.A.

A continuación se presenta un resumen del contenido de los capítulos y sus respectivos artículos del Texto de la Ley.

a) Capítulo I: Disposiciones Generales

Este capítulo está compuesto por los artículos 1 al 3 y desarrolla las disposiciones generales de la Ley de Protección de Datos Personales; mismas que se basan en los preceptos constitucionales de los artículos 1, 3, 24 y 30.

Este Capítulo, describe que la finalidad de la presente Ley tiene como objeto garantizar a cualquier persona física, sea individual o jurídica, nacional o extranjera, el respeto a sus derechos fundamentales, concretamente, su derecho a la autodeterminación informativa en relación con su vida o actividad privada y demás derechos de la persona; así como, la defensa de su libertad e igualdad con respecto al tratamiento automatizado o manual de los datos correspondientes a su persona o sus bienes, dentro del estado de Guatemala. Establece tanto la finalidad de la ley, como el ámbito de aplicación de la misma; y una lista de definiciones de los conceptos utilizados en el articulado.

b) Capítulo II: Principios Básicos para la Protección de los Datos

Este capítulo regula con detalle los diversos aspectos relacionados con el derecho de las personas respecto al manejo de sus datos. El reconocimiento de los deberes de obtención del consentimiento del afectado, como la calidad, seguridad y cesión de los datos. Estipula también las categorías de los datos que requieren una mayor protección a la regla general (datos sensibles); garantías efectivas de acceso a la información personal, corrección, supresión y actualización de la misma. Como también la limitación y excepción al derecho de autodeterminación informativa del ciudadano. Prevé asimismo, la posibilidad de que las entidades públicas y privadas diseñen sus propios protocolos de actuación en materia de protección de datos. Este Capítulo está conformado por los artículos del 4 al 15.

c) Capítulo III: Transferencia de Datos Personales

Este capítulo establece como regla general la imposibilidad de que los administradores de archivos públicos o privados, transfieran datos que hayan recibido directamente de los titulares de la información o de terceros, con ciertas excepciones contenidas en la ley. Conformado por el artículo 16.

d) Capítulo IV: Dirección para la Protección de Datos Personales

Este capítulo se divide en dos secciones (disposiciones generales y estructura interna). Está compuesto por los artículos del 17 al 29, en los que se crea un órgano denominado "Dirección para la Protección de Datos Personales, el cual goza de independencia funcional y de criterio en el desempeño de sus funciones. Órgano regulador con dotado de facultad de independencia, herramientas técnicas y material humano, para llevar a



Congreso de la República Guatemala, C.A.

cabo su trabajo de manera efectiva y objetiva. No se pretende crear una estructura tradicional administrativa sino la unidad de dimensiones moderadas integrada por profesionales calificados con acceso a las últimas tecnologías en materia de informática, un equipo de apoyo, a fin de que su creación no implique una significativa cara en el presupuesto nacional y a la vez pueda cumplir con su objetivo. Sus funciones se caracterizan por ser: preventivas (inscripción y autorización de las bases de datos y protocolos de actuación, inspecciones oficiosas, etc.) y reactiva (atención de denuncias, imposición de órdenes y sanciones administrativas, etc.). A la cabeza del órgano se propone elegir a una persona con experiencia, capacidad y solvencia moral suficientes para afrontar el reto de defender a las personas ante las diversas entidades públicas y privadas, sin importar su investidura o poder. La Dirección estará compuesta por cinco departamentos: la dirección, la subdirección, el Registro de archivos y bases de datos, el Departamento de Inspección y el Departamento de divulgación, este último encargado de crear conciencia entre los habitantes y el mercado acerca de la necesidad de velar por el buen uso de sus datos.

e) Capítulo V: Procedimientos

Este Capítulo está compuesto por los artículos del 31 al 47 y se divide en cuatro secciones. La sección I, Disposiciones Comunes, menciona en su artículo la aplicación supletoria que es el Decreto No. 57-2008 del Congreso de la República, Ley de acceso a la Información Pública. En su sección II, Intervención en archivos y base de datos, desarrolla las denuncias como los efectos de resolución estimatoria. Sección III, desarrolla el régimen disciplinario aplicable a los archivos y bases de datos, aplicable a los administradores de ficheros. Y la sección IV, menciona los procedimientos internos para ejercer la competencia disciplinaria contra los funcionarios de la Dirección y las causas de cesación del director o del subdirector de la Dirección, la adecuación de los ficheros actuales, junto con el reglamento y vigencia. Soporte constitucional en los artículos 180 y 183 literal e) de la Constitución Política de la República.

ANÁLISIS

La Iniciativa de Ley **4090** establece un marco normativo, que incentiva la protección de datos de las personas ante las tecnologías de información de rápida difusión y manejo de datos sin control. Es una garantía de respeto y el derecho de autodeterminación informativa de cualquier persona física o jurídica, en relación a su vida o actividad privada. Como también, la defensa de su libertad e igualdad con respecto al tratamiento automatizado o manual de los datos correspondientes a las personas o sus bienes, por medio de la cual se vela por:

- 1) La protección de datos personales que encontramos ubicados en archivos, base de datos públicas o privadas;
- 2) La protección de los derechos fundamentales de las personas, como los derechos individuales y el derecho de intimidad;
- 3) El derecho de las personas respecto al manejo de sus datos, reconociendo los deberes de obtención del consentimiento del afectado, seguridad y cesión de datos;
- 4) Garantía de información correcta y actualizada de las personas;
- 5) Creación de una Dirección para la Protección de Datos Personales, para la inscripción y autorización de las bases de datos y protocolos de actuación; como también para atención a denuncias, imposición de



00000044

Congreso de la República Guatemala, C.A.

- órdenes y sanciones administrativas;
- 6) Participación de entidad del Estado para la realización de dichos fines, la Procuraduría de los Derechos Humanos;

La normativa contenida en esta Iniciativa de Ley, en particular, establece:

- los mecanismos de intervención en los archivos y bases de datos;
- Prevé mecanismos adecuados para sancionar, en caso de violación, a los administradores de los archivos. Es decir, que no se permite la venta de información con fines de lucro;
- la obligación de la Procuraduría de los Derechos Humanos de elaborar el o los reglamentos necesarios para la presente ley.

Excepciones de aplicación de esta ley:

- 1) A los archivos automatizados de titularidad pública cuyo objeto, legalmente establecido, sea el almacenamiento de datos para su publicidad con carácter general.
- 2) A los archivos mantenidos por personas físicas con fines exclusivamente personales o domésticos.
- 3) A los archivos de información tecnológica o comercial que reproduzcan datos ya publicados en boletines, diarios o reportes oficiales.
- 4) A los archivos de informática jurídica accesibles al público en la medida en que se limiten a reproducir disposiciones o resoluciones judiciales publicadas en periódicos o compilaciones oficiales.
- 5) A los archivos mantenidos por los partidos políticos, sindicatos e iglesias, confesiones y comunidades religiosas en cuanto los datos se refieran a sus asociados o miembros y ex miembros, sin perjuicio de la cesión de los datos que queda sometida lo dispuesto en el artículo 10 de la presente Ley, salvo que resultara de aplicación el artículo 7 por tratarse de los datos personales en él contenidos.

Se regirán por otras disposiciones específicas:

1. Los archivos regulados por la legislación electoral.
2. Los derivados del registro civil y del Registro Nacional de Personas – RENAP -.

Aplicación supletoria de esta ley:

En lo no previsto en esta ley, y en tanto sean compatibles con su finalidad, serán aplicables supletoriamente las disposiciones del Decreto numero 57-2008 del Congreso de la Republica, Ley de Acceso a la Información Pública.



*Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

Institución que participa en esta ley:

La Procuraduría de Los Derechos Humanos.

Esta Iniciativa de Ley desarrolla los procedimientos plasmados en la Constitución Política de la Republica y da cumplimiento a todos y cada uno de los principios constitucionales aplicables.

Esta Ley garantiza confianza a las personas, al encontrar reglas claras e integrales, para la regulación de la difusión de información y datos personales. Por lo que a través del cuerpo normativo se pretende garantizar el tratamiento de los datos personales y sensibles, así como el derecho de toda persona individual a conocer las informaciones que sobre sí mismos se encuentra en los archivos y bases de datos públicas o privadas. Logrando cubrir un vacío legal dentro de la protección de derechos humanos del Estado de Guatemala.

OPINIONES RECABADAS

La Comisión de Economía y Comercio Exterior solicitó la opinión de diversas instancias de gobierno y del sector privado, sobre la importancia de la aprobación de la iniciativa de ley. Al respecto, las instancias consultadas opinaron lo siguiente:

- a. **La Superintendencia de Bancos, SIB**, en la nota enviada al Presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, el 27 de octubre del 2009, opinó en el anexo al Oficio 4816-2009, manifestó "...que luego del estudio y el análisis del referido proyecto se considera que una ley de protección de datos personales es importante para garantizar el tratamiento de los datos personales y sensibles, así como el derecho de toda persona individual a conocer las informaciones que sobre si misma se encuentren en archivos y bases de datos públicos y privados; en ese sentido la ley debe desarrollar principios, derechos, obligaciones y procedimientos que tiendan a garantizar el Hábeas Data, en congruencia con la Ley de Acceso a la Información Publica..."

Sin embargo, en la misma nota el Superintendente de Bancos consideró que el proyecto presentado, contenía inconsistencias de forma y fondo, lo que ameritó su reformulación. Por lo que se tomó en cuenta los comentarios propuestos para la reformulación del proyecto de ley.

- b. **Organismo Judicial**, Secretaria General de la Presidencia, en nota enviada al Presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, el 25 de septiembre del 2009, con el numero de referencia 1938, el doctor Héctor Aníbal De León Velasco, remitió el informe emitido por el asesor específico de dicha presidencia y de la Coordinadora de la Unidad de Información Pública de ese organismo. En el cual se manifestó la necesidad de la creación de normas jurídicas que garanticen la protección de datos personales, en virtud de lo que establece la Constitución de la Republica, en su artículo primero Protección a la Persona.



00000046

*Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

CONCLUSIÓN

Con base a lo antes expuesto, en lo considerado y al tenor de lo preceptuado por el artículo 112 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto No. 63-94 del Congreso de la República, la Comisión de Economía y Comercio Exterior, emite **DICTAMEN FAVORABLE** respecto a la iniciativa de Ley 4090 por medio de la cual se solicita aprobar la Ley de Protección de Datos Personales.

DADO EN LA SALA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE

Mariano Rayo Muñoz
PRESIDENTE

Ricardo Antonio Sarayia Torreblarte
VICEPRESIDENTE

Lester Abigahil Reyna Girón
SECRETARIO

Rosa María Ángel Madrid de Frade

José Alejandro Arévalo Alburez

Mirza Judith Arreaga Meza de Cardona

Manuel De Jesús Barquín Durán

Christian Jacques Boussinot Nuila

César Augusto Del Aguila López



*Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

Carlos Rafael Frón Morales

Oliverio García Rodas

Rubén Eduardo Mejía Linares

Jorge Méndez Herbruger

Carlos Santiago Nájera Sagastume

Eduardo Genis Quej Chen

Oscar Armando Quintanilla Villegas

William Rubén Recinos Sandoval

Christian Michael Ros Acevedo

César Leonel Soto Arango

Fredy Viana Ruano

Roberto Ricardo Villate Villatoro



*Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

DECRETO NUMERO ____-2009

CONGRESO DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO

Qué el artículo 1 de la Constitución Política de la República establece que el Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia y su fin supremo es la realización del bien común.

CONSIDERANDO

Qué el artículo 3 de la Constitución Política de la República establece que el Estado debe garantizar y proteger la integridad y seguridad de la persona.

CONSIDERANDO

Qué el artículo 24 de la Constitución Política de la República establece que la correspondencia de toda persona, sus documentos y libros son inviolables, así como garantiza el secreto de la correspondencia y de las comunicaciones telefónicas, radiofónicas, cablegráficas y otros productos de la tecnología moderna.

CONSIDERANDO

Qué el artículo 30 de la Constitución Política de la República protege los datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia.

POR TANTO

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Artículo 171 literal a) de la Constitución Política de la República de Guatemala.

DECRETA:

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales



*Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

ARTÍCULO 1.- Objeto. La presente Ley tiene como objeto garantizar a cualquier persona física, sea individual o jurídica, nacional o extranjera, el respeto a sus derechos fundamentales, concretamente, su derecho a la autodeterminación informativa en relación con su vida o actividad privada y demás derechos de la persona; así como, la defensa de su libertad e igualdad con respecto al tratamiento automatizado o manual de los datos correspondientes a su persona o sus bienes.

En ningún caso se podrá afectar el secreto de las fuentes de información periodística y el secreto profesional que determinen las leyes correspondientes.

ARTÍCULO 2.- Ámbito de aplicación. La aplicación de la presente ley se extenderá a todos aquellos datos personales que figuren en archivos automatizados o manuales de Organismos del Estado, Organizaciones no gubernamentales, lucrativas y no lucrativas, empresas y a toda modalidad de uso posterior, de datos de carácter personal.

Sin embargo, el régimen de protección de los datos de carácter personal que se establece en la presente ley no será de aplicación:

- a) A los archivos automatizados de titularidad pública cuyo objeto, legalmente establecido, sea el almacenamiento de datos para su publicidad con carácter general.
- b) A los archivos mantenidos por personas físicas con fines exclusivamente personales o domésticos.
- c) A los archivos de información tecnológica o comercial que reproduzcan datos ya publicados en boletines, diarios o reportes oficiales.
- d) A los archivos de informática jurídica accesibles al público en la medida en que se limiten a reproducir disposiciones o resoluciones judiciales publicadas en periódicos o compilaciones oficiales.
- e) A los archivos mantenidos por los partidos políticos, sindicatos e iglesias, confesiones y comunidades religiosas en cuanto los datos se refieran a sus asociados o miembros y ex miembros, sin perjuicio de la cesión de los datos que queda sometida lo dispuesto en el artículo 10 de la presente Ley, salvo que resultara de aplicación el artículo 7 por tratarse de los datos personales en él contenidos.

Se regirán por otras disposiciones específicas:

1. Los archivos regulados por la legislación electoral.
2. Los derivados del Registro Civil y del Registro Nacional de Personas -RENAP-.



*Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

ARTÍCULO 3.- Definiciones. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

- a. Datos de carácter personal: es cualquier información relativa a una persona individual identificada o identificable.
- b. Datos de una persona jurídica: aquellos datos a los que el ordenamiento jurídico constitucional no les ha dado el carácter de público.
- c. Datos sensibles: aquellos datos personales que revelen origen racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o espirituales, condición socioeconómica, información biomédica o genética, vida sexual y antecedentes delictivos, operaciones bancarias, registros tributarios, aduaneros o relativos a actividades económicas.
- d. Archivo, registro, fichero o base de datos: es el conjunto organizado de datos personales que sean objeto de tratamiento o procesamiento, automatizado o no, cualquiera que fuere la modalidad de su formación, almacenamiento, organización o acceso.
- e. Tratamiento automatizado: todas las operaciones que a continuación se indican: producción de registros de datos, aplicación a esos datos de operaciones lógico aritméticas, su modificación, borrado, extracción o difusión.
- f. Autoridad encargada del archivo: aquella persona, individual o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier Organismo del Estado, Organización pública o privada, lucrativa o no lucrativa y empresas que sea competente con arreglo a la ley para decidir cuál será la finalidad del archivo automatizado, cuáles categorías de datos de carácter personal deberán registrarse y cuáles operaciones se les aplicarán.
- g. Interesado: aquella persona física o jurídica, titular de los datos que sean objeto del tratamiento automatizado o manual.
- h. Disociación de datos: aquel tratamiento de datos personales en el cual la información obtenida no pueda asociarse a persona determinada o determinable.

CAPÍTULO II

PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS

ARTÍCULO 4.- Derecho de información en la recolección de los datos. Las personas individuales o jurídicas a quienes se le soliciten datos de carácter personal o de la misma persona jurídica, a cuyos datos no se



*Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

les haya dado el carácter de público, deberán ser previamente informadas de modo expreso, preciso e inequívoco, directamente por quien corresponda sobre lo siguiente:

- a. De la existencia de un archivo automatizado o manual de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de estos y de los destinatarios de la información.
- b. Del carácter obligatorio o facultativo de sus respuestas a las preguntas que se les formulen.
- c. De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos.
- d. De la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, actualización, cancelación y confidencialidad.
- e. De la identidad y dirección del responsable del archivo.

Cuando se utilicen cuestionarios u otros impresos para la recolección, figurarán en los mismos en forma claramente legible, las advertencias a que se refiere el párrafo anterior.

No será necesaria la información a que se refiere la literal a) del presente artículo, si el contenido de ella se deduce claramente de la naturaleza de los datos personales que se solicitan o de la circunstancia en que se recaban o de la información derivada de la actividad ordinaria de la institución o de su giro normal; o de la empresa solicitante.

ARTÍCULO 5.- Consentimiento del interesado. El titular de los datos deberá dar por sí o por su representante legal o apoderado el consentimiento para la entrega de los datos, salvo que la ley disponga otra cosa dentro de los límites razonables.

La razonabilidad deberá ser considerada por el Director o Directora de la Dirección de Protección de Datos Personales si se le planteara en caso de controversia. Lo anterior vale tanto para los archivos de titularidad pública o privada.

El consentimiento se deberá hacer constar por medio de una autorización, ya sea por medio escrito o por cualquier otro medio idóneo, ya sea físico o electrónico. Dicho consentimiento podrá ser revocado sin que tenga efectos retroactivos, por cualquiera de los medios permitidos para acreditar la aquiescencia.

No será necesario el consentimiento cuando:

- a. Exista orden motivada, dictada por autoridad judicial competente.



00000052

*Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

- b. Los datos se obtengan de fuentes de acceso público irrestricto y se trate de listados cuyos datos se limiten a nombre, documento de identidad, y fecha de nacimiento, u otros datos que por ley especial tengan la misma condición.

ARTÍCULO 6.- Calidad de los datos. En cuanto a la calidad de los datos, los mismos se registrarán por lo siguiente:

- a) Solo podrán ser recolectados, almacenados y empleados, datos de carácter personal para su tratamiento automatizado o manual, cuando tales datos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y finalidades legítimas para los que se hayan obtenido.
- b) Los datos de carácter personal objeto de tratamiento automatizado o manual, no podrán utilizarse para finalidades distintas de aquellas para las cuales éstos hubieren sido recogidos.
- c) Dichos datos serán exactos y puestos al día, de forma que respondan con veracidad a la situación real del interesado.
- d) Si los datos de carácter personal registrados resultaren ser incompletos o inexactos en todo o en parte, éstos deberán ser cancelados y sustituidos por el responsable del archivo inmediatamente y de oficio, por los correspondientes datos rectificados, actualizados o complementados. Igualmente serán cancelados si no mediare un consentimiento legal y legítimo o estuviere prohibida su recolección.
- e) Los datos de carácter personal serán cancelados por el responsable del archivo cuando hayan dejado de ser pertinentes o necesarios para la finalidad para la cual hubieren sido recibidos y registrados.
- f) Los datos de carácter personal no serán conservados en forma que permita la identificación de la persona en un período que sea mayor al necesario para los fines para los cuales éstos hubieren sido recabados o registrados. Sin embargo, en ningún caso, serán conservados los datos personales que puedan afectar de cualquier modo a su titular, una vez transcurridos diez (10) años desde la fecha de ocurrencia de los hechos registrados, salvo disposición legal en contrario.
- g) Serán almacenados de forma tal que se garantice plenamente el derecho de acceso por la persona interesada.
- h) Es obligatoria la cancelación de datos de carácter personal por el fallecimiento o deceso confirmado de la persona, y se establece un (1) año como plazo para tal efecto.
- i) Se prohíbe el acopio de datos por medios fraudulentos, desleales o ilícitos, así como la comercialización de los datos personales.



00000053

*Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

- j) Los archivos de datos no pueden tener finalidades contrarias a las leyes ni a la moral pública.

ARTÍCULO 7.- Categorías particulares de datos. Los datos de carácter personal de las personas individuales que revelen su origen racial, sus opiniones políticas, sus convicciones religiosas o espirituales, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y a sus antecedentes delictivos, no podrán ser almacenados de manera automática ni manual, en registros o archivos privados, y serán de acceso restringido en los archivos públicos.

Ninguna persona estará obligada a suministrar datos sensibles. Los datos sensibles solo podrán ser recolectados con finalidades estadísticas o científicas cuando no puedan ser identificados sus titulares.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, las asociaciones religiosas, las organizaciones políticas, sindicales y aquellas que agrupen a los individuos de acuerdo con sus preferencias sexuales o ideológicas, podrán llevar un registro de sus miembros, para uso exclusivo de su fin asociativo.

ARTÍCULO 8.- Seguridad de los datos: Todo archivo, fichero, registro o base de datos, público o privado destinado a proporcionar informes, debe inscribirse en el Registro de Archivos y Bases de Datos contemplados en el artículo 27 de la presente Ley.

El responsable del archivo deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.

No se registrarán datos de carácter personal en ficheros automatizados que no reúnan las condiciones que garanticen plenamente su seguridad e integridad y los de los centros de tratamientos, equipos, sistemas y programas.

En el reglamento de la presente ley, se establecerán los requisitos y las condiciones que deban reunir los ficheros automatizados y los manuales y las personas que intervengan en el acopio, almacenamiento y uso de los datos.

El responsable del archivo y quienes intervengan en cualquier fase del proceso de recolección y tratamiento de los datos de carácter personal, están obligados a guardar secreto profesional.

ARTÍCULO 9.- Obligatoriedad de confidencialidad. El responsable y todas aquellas personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personales, están obligados al secreto después de finalizada su relación con el archivo de datos. El obligado podrá ser relevado del deber de secreto por decisión judicial en lo estrictamente necesario y dentro de la causa que conoce.



00000054

*Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

Las comisiones legislativas que por disposición legal se les confiera atribuciones de investigación, tendrán acceso a los archivos y bases de datos, siempre que se enmarquen estrictamente en el ámbito de las competencias asignadas.

ARTÍCULO 10.- Cesión de datos. Los datos de carácter personal conservados en archivos o bases de datos públicos o privados, solo podrán ser cedidos a terceros para fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario, con el previo consentimiento del interesado, en los términos del artículo 5 de la presente ley.

El consentimiento para la cesión podrá ser revocado pero la revocatoria no tendrá efectos retroactivos.

Lo anterior es aplicable a cualquier archivo independientemente de su titularidad pública o privada.

El consentimiento no será exigido cuando:

- a. Así lo disponga una ley.
- b. Se trate de la cesión de datos personales al Estado o una institución pública de salud o de investigación científica en el área de la salud, relativos a la salud, y sea necesario por razones de utilidad o salud pública, de emergencia o para la realización de estudios epidemiológicos, en tanto se preserve la identidad de los titulares de los datos mediante mecanismos de disociación adecuados.
- c. Se trate de la cesión de datos personales al Estado o a una institución pública en materia de seguridad pública, siempre y cuando la cesión resulte necesaria para fines de esta seguridad pública y de la persecución de delitos sin perjuicio de lo establecido en el artículo 24 de la Constitución Política de la República.
- d. Se trate de cesión de datos personales referente a estadísticas y censos poblacionales para fines específicos.

El cesionario quedará sujeto a las mismas obligaciones legales y reglamentarias del cedente y éste responderá solidaria y conjuntamente por la observancia de los mismos ante la Dirección de Protección de Datos y el titular de los datos.

ARTÍCULO 11.- Derechos y garantías de las personas. Se garantiza el derecho de toda persona a:

- a) Obtener en intervalos razonables, sin demora y a título gratuito, la confirmación de la existencia de datos suyos en archivos o bases de datos, así como la comunicación de dichos datos en forma inteligible.



*Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

- b) Que la información requerida, le sea suministrada en forma clara, exenta de codificaciones y en su caso, acompañada de una explicación de los términos técnicos que se utilicen.
- c) Que la información le sea proporcionada de forma completa y que verse sobre la totalidad del registro perteneciente al titular, aún cuando el requerimiento sólo comprenda un aspecto de los datos personales. En ningún caso el informe podrá revelar datos pertenecientes a terceros, aún cuando se vinculen con el interesado.
- d) La información, a opción del titular, podrá suministrarse por escrito, por medios electrónicos u otro medio idóneo y seguro a tal fin, siempre y cuando en este proceso se tomen las previsiones necesarias para que dicha información no sea modificada o utilizada por terceros.
- e) Obtener, llegado el caso, la rectificación de dichos datos y su actualización o la eliminación de los mismos cuando se hayan tratado con infracción a las disposiciones de la presente Ley.

La autoridad o el responsable del archivo deberán cumplir con lo pedido gratuitamente y resolver en el sentido que corresponda, en el plazo de cinco días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud.

ARTÍCULO 12.- Garantías efectivas. Con base en los principios de celeridad, sencillez y eficacia del trámite, se garantiza que todo interesado puede interponer los recursos administrativos correspondientes ante la Dirección de Protección de Datos, con el fin de ser amparada contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la ley. Lo anterior sin perjuicio de las garantías jurisdiccionales generales o específicas que la Ley establezca para este mismo fin, para lo cual deberá aplicarse supletoriamente el decreto número 119-96 que contiene la Ley de lo Contencioso Administrativo.

Toda persona tiene derecho a controlar que sus datos personales existentes en archivos públicos o particulares cumplan con las reglas previstas en esta Ley, y a obtener en su caso la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios que hubieren sido ocasionados en su persona o intereses debido al uso de sus datos personales.

ARTÍCULO 13.- Del derecho de acceso a la información personal. El derecho de acceso a la información personal garantiza las siguientes facultades al interesado:

- a. Acceder directamente o conocer las informaciones y los datos relativos a su persona.
- b. Conocer la finalidad de los datos a él referidos y al uso que se haya hecho de los mismos.
- c. Solicitar y obtener la rectificación, actualización, cancelación o eliminación y el cumplimiento de la garantía de confidencialidad respecto de sus datos personales.



00000056

*Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

- d. El ejercicio del derecho al cual se refiere este artículo en el caso de datos de personas fallecidas le corresponden a sus sucesores hereditarios universales y legatarios.

ARTÍCULO 14.- Límites y excepciones al derecho a la autodeterminación informativa del ciudadano.

Sólo por ley se podrán establecer límites y excepciones a los principios, derechos y garantías aquí enunciados, siempre que aquéllas sean justas, razonables y acordes con los principios de democracia, transparencia administrativa, celeridad y respeto a los derechos fundamentales de la persona. Los mencionados límites y excepciones sólo podrán establecerse para alcanzar fines legales en cualquiera de los campos siguientes:

- La protección de la seguridad del Estado, de la seguridad pública, de la seguridad económica del Estado, de las relaciones internacionales o para la persecución de las infracciones penales.
- La protección de los propios titulares de los datos, así como los derechos y las libertades de otras personas.
- El funcionamiento de archivos de carácter personal que se utilicen con fines estadísticos o de investigación científica, cuando no existe riesgo de que las personas sean identificadas.
- La adecuada prestación de servicios públicos y de la eficaz actividad ordinaria de la administración pública, por parte de las autoridades públicas.

En caso de que exista duda sobre límite o excepción razonable, se deberá someter a decisión judicial.

ARTÍCULO 15.- Protocolos de actuación. Las personas individuales-o jurídicas, públicas y privadas, que tengan entre sus funciones la recolección, almacenamiento y uso de datos personales, deberán emitir un protocolo de actuación, en el cual se establecerán los pasos a seguir, en la recolección, almacenamiento y manejo de los datos personales, de conformidad con las reglas previstas en la presente Ley.

Los protocolos de actuación deberán ser inscritos en el Registro de archivos y bases de datos para tener validez legal. La Dirección de Protección de Datos Personales podrá, en cualquier momento, verificar que el titular del archivo esté cumpliendo cabalmente con los términos de su código de conducta.

La manipulación de datos con base en un protocolo de actuación inscrito ante la Dirección, hará presumir el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley, para los efectos de autorizar la cesión de los datos contenidos en un archivo o base.

CAPÍTULO III

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES

SECCIÓN ÚNICA

Artículo 16.- La Dirección de Protección de Datos Personales...



*Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

ARTÍCULO 16.- Transferencia de datos personales. Las personas públicas y privadas encargadas del manejo de bases de datos y archivos físicos, no podrán transferir datos que hayan recibido directamente de los titulares de la información o de terceros.

Se exceptúan de la prohibición contenida en el párrafo anterior, las transferencias ocurridas con absoluto arreglo a alguna de las reglas siguientes:

- a) Que la Dirección para la Protección de Datos Personales autorice la transferencia a la persona o institución receptora, pública o privada, por corroborar que con dicho traslado no están siendo vulnerados los principios rectores del manejo de datos personales, descritos en la presente ley.
- b) Que el titular de la información haya autorizado expresa y válidamente tal transferencia y que no haya sido notificada la revocatoria a la autoridad encargada del archivo.
- c) Si se trata de una persona o institución pública o privada domiciliada en el extranjero, dicha transferencia sólo podrá ser llevada a cabo si, además de las condiciones antes mencionadas, dicho receptor está domiciliado en Guatemala o tiene como base un país que ofrezca un nivel de protección de los datos personales, igual o superior al establecido en la República de Guatemala, salvo que el titular de los datos personales autorice expresamente su transferencia, la cual se hará sin más trámite.
- d) Así también la información y datos personales en apego estricto al artículo 58, Sistema de Información de Riesgos, de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, Decreto número 16-2002 del Congreso de la República.

CAPÍTULO IV

DIRECCION PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

SECCIÓN I

Disposiciones generales

ARTÍCULO 17.- Dirección para la Protección de Datos Personales. Se crea un órgano desconcentrado adscrito a la Procuraduría de los Derechos Humanos denominada Dirección para la Protección de Datos Personales, el cual gozará de independencia funcional y de criterio en el desempeño de las funciones que esta ley le encomienda.



*Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

En lo administrativo se ajustará a la organización interna de la Procuraduría de los Derechos Humanos, tanto en materia presupuestaria, personal y salarios.

ARTÍCULO 18.- Atribuciones. Son atribuciones de la Dirección para la Protección de Datos Personales, además de las otras que le impongan esta Ley y su Reglamento, las siguientes:

- a. Velar por el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos, tanto por parte de personas individuales o jurídicas, así como por entes y órganos públicos y privados.
- b. Llevar un registro de los archivos y bases de datos, en soporte físico e informático, que sean propiedad o estén en administración tanto de personas individuales, así como de entes y órganos públicos y privados, conforme a lo establecido en el artículo 8 de la presente ley.
- c. Requerir, de las personas individuales y jurídicas, públicas y privadas, que posean o administren archivos y bases de datos de las descritas en el capítulo I de la presente ley, las informaciones necesarias para el ejercicio de su cargo. Podrá incluso acceder a los archivos y bases de datos en cuestión, a efecto de hacer cumplir efectivamente las normas sobre protección de datos personales.
- d. Autorizar la transferencia de datos a terceros, previa verificación de los requisitos respectivos y las reglas sustantivas, la transferencia de los datos entre los archivos y las bases de datos inscritos en el registro de archivos y bases de datos o entre estos y otras personas o empresas, en los supuestos de las literales a) y c) del artículo 16 de la presente ley.
- e. Recibir de las personas los reclamos por infracción a las normas sobre protección de los datos personales.
- f. Ordenar, de oficio o a petición de parte, la supresión, rectificación, adición o restricción en la circulación, de las informaciones contenidas en archivos y bases de datos, cuando contravengan las normas sobre protección de los datos personales.
- g. Imponer las sanciones administrativas establecidas en la presente ley para las personas individuales o jurídicas, públicas o privadas, que infrinjan las normas sobre protección de los datos personales, de acuerdo con las faltas previstas legalmente.
- h. Remitir anualmente, un informe escrito de sus labores a Procuraduría de los Derechos Humanos, con el fin de que sea incluido en el informe que se presenta cada año al Congreso de la República.
- i. Contribuir en la redacción de anteproyectos de ley tendientes a implementar las normas sobre protección de los datos personales.



00000059

*Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

- j. Respetar los diversos grados de autonomía administrativa e independencia funcional, dictar las directrices obligatorias y necesarias a efecto de que las instituciones públicas implementen los procedimientos adecuados respecto del manejo de los datos personales.
- k. Fomentar entre los habitantes el conocimiento de los derechos concernientes al acopio, almacenamiento, transferencia y uso de sus datos personales.

El director y el subdirector de la Dirección para la Protección de Datos Personales, gozarán de independencia funcional y de criterio, en el ejercicio de sus facultades y atribuciones legales y reglamentarias.

ARTÍCULO 19.- Director de la Dirección. La Dirección para la Protección de Datos Personales estará a cargo de un director nacional, quien será elegido de una lista de cuatro personas, que se conformará mediante un concurso público bajo la supervisión y nombramiento definitivo del Procurador de los Derechos Humanos.

El director de la Dirección, deberá cumplir con los requisitos establecidos en la presente Ley y no podrá tener ninguno de los impedimentos o incompatibilidades establecidas en la misma. El director nacional de Protección de Datos Personales permanecerá en su cargo durante cinco (5) años, y podrá ser reelecto hasta por una vez.

Durante su gestión, podrá ser removido de acuerdo con el régimen administrativo y laboral aplicable, garantizándosele en todo momento, el debido proceso.

ARTÍCULO 20.- Requisitos. Para ser director nacional de Protección de Datos Personales se requiere:

- a) Ser guatemalteco;
- b) Ser de reconocida honorabilidad;
- c) Ser colegiado activo;
- d) Tener por lo menos cinco años de ejercicio profesional;
- e) Estar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
- f) No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos;
- g) Presentar constancia de no haber sido sancionado por el colegio profesional respectivo; y,
- h) No tener antecedentes penales ni policíacos.



00000060

*Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

ARTÍCULO 21.- Impedimentos. No podrá ser nombrado director nacional de Protección de Datos Personales quien, aún cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo anterior, sea o haya sido propietario, accionista, miembro de la junta directiva, gerente, asesor o empleado de una empresa dedicada a la recolección o almacenamiento de datos personales. Dicha prohibición persistirá hasta por dos años después de haber cesado sus funciones.

Igualmente tendrán impedimento, los parientes dentro del tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad de la persona que se está en alguno de los supuestos mencionados en el párrafo anterior.

ARTÍCULO 22.- Subdirección. La Dirección para la Protección de Datos Personales tendrá un subdirector, quien será elegido de una lista de cuatro personas, que se conformará mediante un concurso público, diferente al del director, bajo la supervisión y nombramiento definitivo del Procurador de los Derechos Humanos.

El subdirector de la Dirección, deberá cumplir con los requisitos establecidos en esta Ley para el director y no podrá tener ninguno de los impedimentos o prohibiciones para ejercer, establecidas en la presente ley.

El subdirector nacional de Protección de Datos Personales permanecerá en su cargo durante cinco años, y podrá ser reelecto hasta por una vez. Durante su gestión, no podrá ser removido sino por justa causa, garantizándose en todo momento el debido proceso.

Además de las otras funciones que le fijen la presente Ley y su Reglamento, al subdirector le corresponderá suplir al director nacional en sus ausencias temporales o permanentes. Por medio de normativa interna, la dirección le podrá asignar otras funciones específicas.

En caso de que quedaren vacantes los puestos de director y subdirector nacionales, asumirá interinamente la dirección el jefe del Departamento de Inspección de Archivos y Bases de Datos de la Dirección.

ARTÍCULO 23.- Personal de la Dirección. La Dirección para la Protección de Datos Personales contará con el personal técnico y administrativo necesario para el buen ejercicio de sus funciones, designado mediante concurso por idoneidad bajo la estructura administrativa, presupuestaria, procedimientos y competencias de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Deberá capacitar permanentemente a su personal en el manejo de nuevas herramientas tecnológicas y nuevas formas de manejo de datos personales.

El personal está obligado a guardar secreto y deber de confidencialidad de los datos de carácter personal de que conozca en el desarrollo de sus funciones.

ARTÍCULO 24.- Prohibiciones. Todos los empleados de la Dirección para la Protección de Datos Personales tienen las prohibiciones siguientes:



*Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

- a) Prestar servicios a las personas o empresas que se dediquen al acopio, almacenamiento o manejo de datos personales. Dicha prohibición persistirá hasta dos años después de haber cesado sus funciones.
- b) Interesarse personal e indebidamente en asuntos de conocimiento de la Dirección.
- c) Revelar o de cualquier forma propalar los datos personales a que ha tenido acceso con ocasión de su cargo. Esta prohibición persistirá indefinidamente aún después de haber cesado en su cargo.
- d) En el caso de los funcionarios que ocupen una plaza como profesionales, ejercer externamente su profesión. Lo anterior tiene como excepción el ejercicio de la actividad docente en centros de educación superior o la práctica liberal de la profesión a favor de parientes dentro de los grados de ley, siempre que no se esté ante el supuesto de la literal a) anterior.

La inobservancia de cualquiera de las anteriores prohibiciones será considerada falta gravísima, para efectos de aplicación del régimen disciplinario, sin perjuicio de las otras formas de responsabilidad que tales conductas pudieran acarrear.

SECCIÓN II

ESTRUCTURA INTERNA

ARTÍCULO 25.- Organigrama. La Dirección para la Protección de Datos Personales estará compuesta al menos de los órganos siguientes:

- a) El director nacional.
- b) El subdirector nacional.
- c) El registro de archivos y bases de datos.
- d) El departamento de inspección de archivos y bases de datos.
- e) El departamento de divulgación.

Para ocupar la jefatura de cualquier departamento, se requiere poseer un título profesional en grado al menos de licenciatura, en una carrera relacionada con el cargo.

ARTÍCULO 26.- Registro de archivos y bases de datos. Todo archivo, registro, base o banco de datos público y privado administrado con fines de distribución, difusión o comercialización, que contenga datos sensibles, debe inscribirse en el Registro que al efecto habilite la Dirección de Protección de Datos.

El Registro de archivos y bases de datos es el órgano de la Dirección para la Protección de Datos Personales encargado de inscribirlos.



00000062

Congreso de la República Guatemala, C.A.

Asimismo, deberá inscribir:

- a. Los protocolos de actuación a que hace referencia el artículo 15 de la presente Ley.
- b. Cualesquier otras información impuesta por la ley.

El Registro de archivos y bases de datos se encuentra sustraído de la potestad de avocación por parte de quien ocupe la dirección nacional.

Quien comercialice o distribuya por cualquier medio, archivos de información de datos personales, datos sensibles o personales sensibles, protegidos por la las leyes del país, sin estar registrados y/o sin contar con la autorización expresa por escrito del titular de los mismos y que no provengan de registros públicos, será sancionado conforme a la legislación vigente.

ARTÍCULO 27.- Departamento de inspección de archivos y bases de datos. Corresponde al Departamento de Inspección de Archivos y Bases de Datos, la tramitación de las quejas y solicitudes recibidas por personas respecto del uso que esté siendo dado a sus datos personales.

Actuará como órgano director del proceso, pudiendo llevar a cabo las diligencias de investigación necesarias, incluida la posibilidad de exigir de los archivos y las bases de datos el suministro de la información requerida, así como la inspección *in situ* de tales archivos y bases de datos. Podrá asimismo adoptar las medidas cautelares necesarias para la efectiva garantía del buen uso de los datos personales.

Mediante un sistema de selección aleatoria permanente deberá controlar que los archivos y las bases de datos a que se refiere esta Ley, cumplan con las normas para la protección de los datos personales.

ARTÍCULO 28.- Departamento de divulgación. Compete al Departamento de divulgación, la elaboración y ejecución de una estrategia de comunicación dirigida a permitir que los habitantes conozcan los derechos derivados del manejo de sus datos personales, así como los mecanismos que el ordenamiento jurídico prevé para la defensa de tales prerrogativas.

Le corresponde asimismo, promover entre las personas y empresas que recolecten, almacenen o manipulen datos personales, la adopción de prácticas y protocolos de actuación acordes con la protección de dicha información.

CAPÍTULO V

PROCEDIMIENTOS

SECCIÓN I



*Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

DISPOSICIONES COMUNES

ARTÍCULO 29.- Aplicación supletoria. En los casos no establecidos en la presente ley, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Decreto número 57-2008 del Congreso de la República, Ley de Acceso a la Información Pública.

SECCIÓN II

INTERVENCIÓN EN ARCHIVOS Y BASES DE DATOS

ARTÍCULO 30.- Denuncia. Cualquier persona que crea tener un derecho o interés legítimo puede denunciar ante la Dirección para la Protección de Datos Personales que un archivo o base de datos, público o privado, actúa en contravención de las reglas para el manejo de los datos personales, establecidas en el capítulo I de la presente Ley.

ARTÍCULO 31.- Trámite de las denuncias. Recibida la denuncia, el Departamento de inspección conferirá al propietario o administrador del archivo o base de datos, un plazo de tres días hábiles, para que se pronuncie acerca de la veracidad de tales cargos. El denunciado deberá remitir los medios de prueba que respalden sus afirmaciones. Todo informe será entregado bajo juramento. La omisión de rendir el informe en el plazo estipulado, hará que se tengan por ciertos los hechos acusados.

En cualquier momento, el Departamento de Inspección de Archivos y Bases de Datos podrá ordenar al denunciado la presentación de la información necesaria. Asimismo, podrá efectuar inspecciones in situ en sus archivos o bases de datos. Para salvaguardar los derechos del interesado, puede dictar, mediante acto fundado, las medidas cautelares que aseguren el efectivo resultado del procedimiento.

A más tardar un mes después de la presentación de la denuncia, el Departamento de inspección deberá presentar al director nacional, un informe sobre la existencia o no de actos lesivos del derecho a la autodeterminación informativa del interesado. El Director Nacional deberá resolver en un plazo de cinco días hábiles. Contra la decisión del Director, cabrá únicamente el recurso de revocatoria, agotando la vía administrativa.

ARTÍCULO 32.- Efectos de la resolución estimatoria. Si en la resolución, el director nacional determinare que la información del interesado es falsa, incompleta, inexacta, o bien que de acuerdo con las normas sobre protección de datos personales, la misma fue indebidamente recolectada, almacenada o difundida, deberá ordenar su inmediata supresión, rectificación, adición o aclaración, o bien restricción respecto de su transferencia y difusión. Si el denunciado no cumpliere íntegramente con lo ordenado, estará sujeto a las sanciones previstas en esta y otras leyes.

SECCIÓN III



00000064

Congreso de la República Guatemala, C.A.

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

ARTÍCULO 33.- Sujetos. Los responsables de los archivos y los encargados de su tratamiento estarán sujetos al régimen disciplinario establecido en la presente Ley.

Cuando se trate de archivos de los que sea responsable la administración pública estarán sujetos, en cuanto al procedimiento y a las sanciones, a lo establecido en la sección IV del capítulo V de la presente Ley.

ARTÍCULO 34.- Trámite. De oficio o a instancia de parte, la Dirección para la Protección de Datos Personales podrá iniciar un procedimiento tendiente a demostrar si un archivo o base de datos de los regulados por esta Ley, está siendo empleado de conformidad con sus principios.

Dictado el acto inicial por parte del director nacional, el Departamento de Inspección de Archivos y Bases de Datos se constituirá en órgano director del procedimiento, para lo cual deberá seguir los trámites correspondientes.

El acto final del procedimiento deberá ser dictado por el director nacional. Contra su decisión, cabrá recurso de revisión.

ARTÍCULO 35.- Sanciones. De concluir el director nacional que la persona individual o jurídica ha cometido una de las faltas tipificadas en esta Ley, deberá imponer alguna de las sanciones siguientes:

- a. Para las faltas leves, una multa de doscientos cincuenta hasta quinientos salarios mínimos legales vigentes.
- b. Para las faltas graves, una multa de quinientos uno a mil salarios mínimos legales vigentes. La reiteración de una falta grave se considerará como falta grave.
- c. Para las faltas gravísimas, una multa mil uno hasta de cinco mil salarios mínimos legales vigentes; y la suspensión para el funcionamiento del archivo de uno a seis meses. La reiteración de una falta gravísima, ocasionará la suspensión definitiva del archivo.

ARTÍCULO 36.- Faltas leves. Serán consideradas faltas leves, para los efectos de la presente Ley:

- a. La recolección de datos personales para su uso en un archivo o base de datos sin hacer al interesado todas las advertencias especificadas en el artículo 4 de esta Ley.
- b. Recolectar, almacenar y transmitir datos personales de terceros por medio de mecanismos inseguros o que de alguna forma no garanticen la seguridad e inalterabilidad de los datos.

ARTÍCULO 37.- Faltas graves. Serán consideradas faltas graves, para los efectos de la presente Ley:

1. La recolección de datos personales para su uso en un archivo o base de datos sin hacer al interesado todas las advertencias especificadas en el artículo 4 de esta Ley.



00000065

*Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

- a. Recolectar, almacenar, transmitir o de cualquier otra forma emplear datos personales sin el consentimiento expreso del titular de los datos, con arreglo a las disposiciones del artículo 4 de la presente Ley.
- b. Transferir datos personales a otras personas o empresas en Guatemala en contravención a las reglas establecidas en el artículo 10 de la presente Ley.
- c. Transferir datos personales a otras personas o empresas radicadas en el extranjero en contravención a las reglas establecidas en el artículo 16 de la presente Ley.
- d. Recolectar, almacenar, transmitir o de cualquier otro modo emplear datos personales para una finalidad distinta de la autorizada por el titular de la información.
- e. Negarse injustificadamente a dar acceso a un interesado sobre los datos que consten en archivos y bases de datos, a fin de verificar su calidad, recolección, almacenamiento y uso conforme a esta Ley.
- f. Negarse injustificadamente a eliminar o rectificar los datos de una persona que así lo haya solicitado por medio claro e inequívoco.

ARTÍCULO 38.- Faltas gravísimas. Serán consideradas faltas gravísimas, para los efectos de la presente Ley:

- a. Recolectar, almacenar, transmitir o de cualquier otra forma emplear, por parte de personas físicas o jurídicas privadas, datos personales, según la definición prevista en el artículo 7 de la presente Ley.
- b. Obtener de los titulares o de terceros, datos personales de una persona por medio de engaño, violencia o amenaza.
- c. Revelar información registrada en una base de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a guardar conforme la ley.
- d. Proporcionar a un tercero información falsa a la contenida en un archivo de datos, con conocimiento de ello.

SECCIÓN IV

PROCEDIMIENTOS INTERNOS

ARTÍCULO 39.- Régimen disciplinario interno. Para la aplicación del Régimen disciplinario interno de los funcionarios de la Dirección, el Departamento de inspección funcionará como órgano director del



00000066

*Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

procedimiento, será competencia del director nacional dictar los actos inicial y final. Contra este último cabrá recurso de revisión.

La aplicación del régimen disciplinario al director nacional; al subdirector de la Dirección para la Protección de Datos Personales, deberá efectuarse de conformidad con el procedimiento ordinario que regula la Ley. Para tales efectos, corresponderá al Procurador de los Derechos Humanos la conformación del órgano encargado de dirigir el procedimiento.

El acto final del procedimiento lo dictará el Procurador de los Derechos Humanos y contra este cabrá únicamente el recurso de reposición.

ARTÍCULO 40.- Sanciones. Las faltas leves serán sancionadas con amonestación verbal o escrita. Las faltas graves con amonestación escrita o suspensión sin goce de salario de hasta por un mes. Las faltas gravísimas serán sancionadas con suspensión sin goce de salario hasta por tres meses o con despido sin responsabilidad patronal.

Al imponer la sanción, el jerarca deberá tomar en consideración, además de la gravedad de la falta, el grado de culpabilidad del funcionario y el daño efectivo o peligro causado con su actuación.

ARTÍCULO 41.- Faltas disciplinarias. Además de las otras conductas previstas en las normas estatutarias aplicables a la Dirección de Protección de Datos Personales, serán consideradas faltas, para la imposición de las sanciones descritas en el artículo anterior, las siguientes:

- a) Faltas leves: la renuencia injustificada de participar en las actividades de capacitación programadas periódicamente por la Dirección.
- b) Faltas graves: el atraso indebido en la atención de una denuncia o solicitud de intervención y la reiteración de una falta leve.
- c) Faltas gravísimas: el incumplimiento a las prohibiciones descritas en el artículo 23 de esta Ley y la reiteración de una falta grave.

ARTÍCULO 42.- Causas de cesación del director o del subdirector de la Dirección. El director de la Dirección para la Protección de los Datos Personales, cesará en sus funciones, por cualquiera de las causas siguientes:

- a. Renuncia del cargo.
- b. Muerte o incapacidad sobreviniente.



*Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

- c. Comprobar su participación en actividades políticas partidistas o el ejercicio de funciones incompatibles con su cargo.
- d. Haber sido condenado en sentencia firme por delito doloso.
- e. Por faltas gravísimas si así fuere determinado conforme a lo dispuesto en el artículo 39.

ARTÍCULO 43.- Resolución. Cuando las faltas a que se refieren los artículos 37, 38 y 39 de la presente Ley, fuesen cometidas en archivos públicos, el director de la Dirección de Protección de Datos dictará una resolución estableciendo las medidas que proceda adoptar para que cesen o se corrijan los efectos de la falta.

Esta resolución se notificará al responsable del archivo, al órgano del que dependa jerárquicamente y a los afectados, si los hubiera. La resolución podrá dictarse de oficio o a petición de parte.

ARTÍCULO 44.- Adecuación de los archivos actuales. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que al momento de entrar en vigencia la presente ley son propietarias o administradoras de las bases de datos objeto de esta Ley, deberán adecuar sus procedimientos y reglas de actuación, así como el contenido de sus ficheros a lo establecido en la presente Ley, en un plazo máximo de seis (6) meses.

ARTÍCULO 45.- Se reforma el artículo 274 D del Código Penal de Guatemala, Decreto número 17-73 del Congreso de la República, el cual queda así:

"REGISTROS PROHIBIDOS

ARTICULO 274 "D". Se impondrá prisión de dos (2) a seis (6) años y multa de cien mil (100,000) a un millón (1,000,000) de quetzales, al que creare un banco de datos, un archivo o un registro informático con datos personales que puedan afectar la intimidad, la honorabilidad o la reputación de las personas."

Artículo 46.- Se reforma el artículo 274 F del Código Penal de Guatemala, Decreto número 17-73 del Congreso de la República, el cual queda así:

"USO DE INFORMACIÓN

ARTICULO 274 "F". Se impondrá prisión de dos (2) a seis (6) años y multa de cien mil (100,000) a un millón (1,000,000) de quetzales, al que, sin autorización, utilizare los registros informáticos o datos personales de otro, o ingresare, por cualquier medio, a su banco de datos o archivos electrónicos."

Artículo 47.- Reglamento. La Procuraduría de los Derechos Humanos emitirá el reglamento para la observancia de la presente ley, en un plazo no mayor de tres (3) meses a partir de la vigencia de la misma. Caso



00000068

*Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

contrario, el Organismo Legislativo iniciará las acciones correspondientes por incumplimiento de deberes contra el Procurador de los Derechos Humanos.

ARTÍCULO 48.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia ocho (8) días después de su publicación en el Diario Oficial.

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN.

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL _____ DE DOS MIL _____.

[Firmas manuscritas]
R. Sosa Vía. T.
Manuel Baeza RMY
ROSEN MEIN
CARLOS FLORES